

56ª REUNION — 7ª SESION EXTRAORDINARIA — ENERO 10 DE 1974

**Presidencia del doctor JOSE ANTONIO ALLENDE, vicepresidente 1º del Honorable Senado, y del doctor AMERICO ALBERTO GARCIA, vicepresidente 2º del Honorable Senado**

**Secretarios: señor ALDO HERMES CANTONI y escribana pública IRMA S. DE CESARETTI**

**Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y DELFOR W. CARESSI**

SENADORES PRESENTES:

ALLENDE, José Antonio  
ANGELOZ, Eduardo César  
AVALOS, Pedro Isaac  
BARBORA de NASIF, Yamili  
BARONI, Danilo Luis  
BELENGUER, Emilio  
BLANCO, Rodolfo E.  
BRAVO, Leopoldo  
BRITOS, Oraldo Norvel  
BRIZUELA, Guillermo Ramón  
BRIZUELA, Hugo Genaro  
CACERES, Rubén Osvaldo  
CAMPORA, Pedro L.  
CANTONI, Apolo  
CARO, J. Armando  
CERRO, Francisco Eduardo  
CORNEJO LINARES, Juan Carlos  
CULASSO MATTEI, Luis  
CHALE, Juan Carlos  
D'AGOSTINO, Lucio Roque  
DE LA RUA, Fernando  
DÍAZ BIALET, Alejandro  
ESPERANZA, Joaquín Horacio  
EVANS, Carlos H.  
FONROUGE, Alberto M.  
FRANCO, Carlos A.  
FROIS, Domingo Andrés  
FRUGOLI, Amadeo Ricardo  
GARCIA, Américo Alberto  
GARCIA, Justino  
HERRERA, Dermidio Fernando L.  
JAUREGUI, Rafael Zenón  
LEÓN, Luis A.  
LORENZO, Ramón  
LOSADA, Mario  
LUDER, Ítalo A.

LUNA, Pedro Antonio  
MANCINI, Omar A.  
MARTIARENA, José H.  
MARTINEZ, Julio César  
MAYA, Héctor Domingo  
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.  
MOREIRA, Miguel Orlando  
MORENO, Ramón Enrique  
MURGUÍA, Edgardo P. V.  
NAPOLI, Antonio Oscar  
PAZ, Eduardo Alberto  
PENNISI, Afrio  
PERETTE, Carlos H.  
PERONI, Carmelo  
POSE, Jorge Juan  
PUGLIESE, Juan Carlos  
RODRIGUEZ, Ginés Froilán  
ROMERO, Humberto Antonio  
SAADI, Vicente Leónides  
SALAS CORREA, Luis I.  
VALLE de GONZÁLEZ, Leni Rosa  
VIVAS, Angel Juan Gregorio  
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON LICENCIA:

BENI, Juan Carlos E.  
HERRERA, José Jorge

AUSENTES, CON AVISO:

CARNEVALE, Luis  
ELIAS, Florencio  
GRUBISICH, Pablo Eliseo  
LORENZO, Jorge Luis  
SALMOIRAGHI, José César  
SAPAG, Elías  
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito  
VAL, Buenaventura Justo

## SUMARIO

## 1.—Asuntos entrados:

- I.—Decreto de la Presidencia. (Pág. 3084.)
- II.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicitan acuerdos. (Página 3085.)
- III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud. (Pág. 3085.)
- IV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre construcción de un panteón nacional denominado Altar de la Patria. (Pág. 3089.)
- V.—Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo sobre ampliación del temario de las sesiones extraordinarias. (Pág. 3091.)
- VI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se otorga permiso a varios ciudadanos para aceptar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Pág. 3091.)
- VII.—Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se veta la ley 20.616 (pavimentación de las rutas 14 y 105, en Misiones). (Página 3092.)
- VIII.—Mensaje del Poder Ejecutivo en contestación a una comunicación del Honorable Senado sobre redes cloacales y de aguas corrientes en la provincia del Chaco. (Página 3092.)
- IX.—Mensaje del Poder Ejecutivo en contestación a una comunicación del Honorable Senado sobre pavimentación de las rutas 23 y 242 en Río Negro. (Pág. 3093.)
- X.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificación de los decretos leyes 18.037/68 y 18.038/68 (jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia y autónomos). (Pág. 3094.)
- XI.—Mensaje del Poder Ejecutivo en contestación a una comunicación del Honorable Senado sobre pavimentación de un tramo de la ruta nacional 40. (Pág. 3095.)
- XII.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 3095.)
- XIII.—Dictámenes de comisiones. (Pág. 3098.)
- XIV.—Peticiones particulares. (Pág. 3098.)
- XV.—Proyecto de ley del señor senador Lorenzo (J. L.) por el que se declara monumento nacional a la Escuela Normal N° 1 de Profesoras Presidente Roque Sáenz Peña. (Página 3098.)
- XVI.—Proyecto de comunicación del señor senador Cerro sobre inclusión en el temario de las sesiones extraordinarias del proyecto de ley sobre expropiación de la Compañía Argentina de Teléfonos. (Pág. 3099.)

**XVII.—Proyecto de resolución** del señor senador Perette y otros señores senadores por el que se condenan los atentados a los talleres gráficos de COGTAL, donde se imprimían los diarios «El Mundo» y «Mayoría». (Pág. 3099.)

- 2.—Licencia solicitada por el señor senador Herrera (J.J.). Se concede con goce de dieta. (Pág. 3100.)
- 3.—A moción del señor senador Saadi se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión de Interior y Justicia sobre construcción de un panteón nacional denominado Altar de la Patria. (Pág. 3100.)
- 4.—Moción del señor senador Perette para considerar sobre tablas el proyecto de resolución que figura en el punto XVII de los asuntos entrados. Se rechaza. (Pág. 3118.)
- 5.—Pedido de pronto despacho del señor senador Zarriello para los proyectos de comunicación del mismo señor senador sobre suspensión de la vigencia y aplicación del decreto ley 20.094, llamado ley de navegación, y modificación de la ley 14.394 (bien de familia). (Pág. 3119.)
- 6.—Consideración del dictamen de las comisiones de Economía, de Legislación General y de Industria y Minería sobre creación de la sociedad del Estado. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 3119.)

## 7.—Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Página 3130.)

—En Buenos Aires, a los diez días del mes de enero de 1974, a la hora 19 y 47, dice el

**Sr. Presidente (Allende).** — Con la presencia de cuarenta y un señores senadores, que constituyen quórum reglamentario, queda abierta la séptima sesión extraordinaria del presente período legislativo.

## 1

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente (Allende).** — Por Secretaría se dará lectura a los asuntos entrados.

**Sr. Secretario (Cantoni).** — (*Leyendo*):

## I

## Decreto de la Presidencia

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1973.

Atento: la autorización conferida oportunamente a esta Presidencia por la Honorable Cámara,

*El vicepresidente primero del Honorable Senado de la Nación*

## DECRETA:

Artículo 1º — Designase al señor senador don Miguel Orlando Moreira para integrar la Comisión de

sive el tipo de relaciones que mantenemos con Uruguay, y también en cuanto a emisoras del Paraguay.

Considero, señor presidente, que este proyecto de resolución debe tratarse sobre tablas, y que

nosotros debemos afirmar una prensa libre, segura, responsable y con las debidas garantías. Existe en el Parlamento la sensibilidad suficiente y la unidad de todos los sectores para lograr un anhelo de bien común que determine la seguridad de este importante quehacer.

Por estas razones, señor presidente, entiendo que esta requisitoria en defensa de la libertad de prensa y de información debe tratarse sobre tablas y merecer el pronunciamiento favorable de esta Cámara, y así lo solicito.

**Sr. Martiarena.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena.** — Señor presidente: vamos a oponernos al tratamiento sobre tablas. El reconocimiento que se ha hecho por parte del señor senador de la preocupación que ha demostrado el Ministerio del Interior en la investigación del suceso que motiva este pedido, demuestra la necesidad del pase a comisión para esperar los resultados de la investigación que se practica.

**Sr. León.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Chaco.

**Sr. León.** — Iba a decir que los argumentos del señor presidente del bloque de la mayoría no quitan lo importante que sería para este cuerpo hacerse solidario en el repudio frente a este tipo de hechos, sobre todo teniendo en cuenta que este Honorable Senado permanentemente ha condenado cualquier acto de violencia y este proyecto mantiene la filosofía de la condena de los mismos. Eso no obsta a la investigación que pueda hacer el señor ministro del Interior y que nosotros estamos de acuerdo en que se realice. Solicito que este cuerpo se exprese en el sentido que solicita nuestro bloque.

**Sr. Martiarena.** — El pase a comisión no obsta la solidaridad que oportunamente pueda el cuerpo expresar.

**Sr. Cerro.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Cerro.** — Señor presidente: en nombre del Partido Revolucionario Cristiano y fiel a un estilo político de paz y de democracia, queremos expresar nuestra más absoluta condenación a este nuevo hecho de violencia. En todos los momentos en que se han tratado en este recinto casos semejantes, hemos sido consecuentes con la condenación de todos los actos de violencia, cualquiera sea la ideología del afectado. Por ello expresamos nuestra adhesión a la iniciativa del bloque radical.

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada

por el señor senador Perette para considerar sobre tablas el proyecto de resolución.

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Presidente (Allende).** — Habiendo sido rechazado el tratamiento sobre tablas, el proyecto pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales.

## 5

### PEDIDO DE PRONTO DESPACHO

**Sr. Presidente (Allende).** — El señor senador Zarriello ha pedido la palabra para una indicación de pronto despacho.

**Sr. Zarriello.** — Señor presidente: en el transcurso del período de sesiones extraordinarias presenté dos proyectos de comunicación reclamando del Poder Ejecutivo la inclusión de ambos —de los cuales soy autor— en dicho período. Uno, suspende la vigencia y aplicación del decreto ley 20.094, llamado ley de la navegación, y el otro se refiere a modificaciones al artículo 35 de la ley 14.394, sobre el bien de familia.

Solicito, señor presidente, pronto despacho para la consideración de estos dos pedidos de comunicación, a los efectos de que sean incorporados en este período de sesiones extraordinarias.

Estoy de acuerdo con el presidente de la República, general Perón, quien refiriéndose a la labor del Parlamento dijo en su última conferencia de prensa que los legisladores han resuelto no descansar en enero ni en febrero para poder tratar el cúmulo de leyes que el Poder Ejecutivo les ha enviado, así como también los proyectos que las distintas fuerzas políticas han presentado.

Creo que deberíamos ser consecuentes en este aspecto y admitir la proposición que yo formulo para que estos dos importantes proyectos que hacen a la liberación nacional sean considerados en este período de sesiones extraordinarias.

**Sr. Presidente (Allende).** — ¿Formula usted una moción de preferencia?

**Sr. Zarriello.** — No, señor presidente: lo que propongo es que la comisión produzca pronto despacho a las iniciativas mencionadas para que, luego, puedan ser consideradas.

**Sr. Presidente (Allende).** — Se hará conocer a la comisión la recomendación de pronto despacho propuesta por el señor senador.

## 6

### CREACION DE LA SOCIEDAD DEL ESTADO

**Sr. Presidente (Allende).** — Corresponde considerar el orden del día número 135: dictamen de las comisiones de Economía, de Legislación General y de Industria y Minería en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación de la sociedad del Estado.

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Cantoni). — (Leyendo):**

**Dictamen de las comisiones**

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Economía, de Legislación General y de Industria y Minería han considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea la «sociedad del Estado»; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º: substituir la expresión inicial: «Se denomina "Sociedad del Estado" a...», por: «Son Sociedades del Estado...».

Reemplazar la frase: «...o las sociedades sujetas a esta ley, ...», por la siguiente: «...o las sociedades que se constituyan en orden a lo establecido por la presente ley, ...».

Artículo 3º: intercalar en su última frase, a continuación de: «... incorporación...», lo siguiente: «... a su capital...».

Suprimir la expresión: «... a su capital.» con la que termina el artículo.

Artículo nuevo: incorporar como artículo 6º, el siguiente texto:

No serán de aplicación a las Sociedades del Estado, las leyes de contabilidad, de obras públicas y de procedimientos administrativos.

En consecuencia, el artículo 6º del proyecto pasa a ser 7º.

Artículo nuevo: agregar como artículo 8º, el siguiente texto:

Los certificados representativos de las participaciones del Estado nacional en las Sociedades del Estado, integrarán el patrimonio de la Corporación de Empresas Nacionales, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la ley 20.558.

El artículo 7º del proyecto pasa a ser 9º, corrigiéndose el error material que contiene su texto, reemplazando las palabras «presentación», por «prestación», y «encuentren», por «encuentre».

El artículo 8º del proyecto, pasa a ser 10

De acuerdo con el artículo 91 del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 21 de diciembre de 1973.

*Hugo Genaro Brizuela. — Alejandro Díaz Bialek. — Apolo Cantoni. — José Antonio Allende. — Buenaventura Justo Vai. — Luis A. Carnevale. — Leopoldo Bravo. — Carlos A. Franco. — Pedro Isaac Avalos. — Domingo Andrés Frois. — Juan Carlos Cornejo Linares. — Ramón Lorenzo.*

**PROYECTO DE LEY**

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Se denomina «Sociedad del Estado» a aquéllas que, con exclusión de toda participación de capitales privados, constituyan el Estado nacional, los Estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto o las sociedades sujetas a esta ley, para desarrollar actividades de carácter industrial y comercial o explotar servicios públicos.

Art. 2º — Las sociedades del Estado podrán ser unipersonales y se someterán, en su constitución y funcionamiento, a las normas que regulan las sociedades anónimas, en cuanto fueren compatibles con las disposiciones de la presente ley, no siendo de aplicación lo previsto en el artículo 31 del decreto ley 19.550/72.

Art. 3º — En ningún caso las sociedades del Estado podrán transformarse en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria ni admitir, bajo cualquier modalidad, la incorporación de capitales privados a su capital.

Art. 4º — El capital de la sociedad del Estado será representado por un certificado no negociable, que será divisible en función del número de socios que las constituyan y proporcional a sus aportes.

Art. 5º — No podrán ser declaradas en quiebra. Sólo mediante autorización legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad del Estado.

Art. 6º — Los directores de las sociedades del Estado estarán sometidos al régimen de incompatibilidades previsto por el artículo 310, primera parte, del decreto ley 19.550/72.

Art. 7º — Facúltase al Poder Ejecutivo para transformar en sociedad del Estado las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta, las empresas del Estado y las constituidas por regímenes especiales que al presente existen y los servicios cuya presentación se encuentre a su cargo.

Art. 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**ANTECEDENTE**

**Mensaje del Poder Ejecutivo**

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1973.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

Tengo el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad un proyecto de ley que crea la Sociedad del Estado, estructura jurídica destinada a ofrecer un marco normativo adecuado a la actividad empresarial del Estado.

La asunción por el Estado de actividades comerciales e industriales y, así mismo, la explotación en forma directa de los servicios públicos, constituye un rasgo típico de las sociedades

contemporáneas, en las que abandonando la actitud estática propia del demoliberalismo clásico, el Estado desborda sus funciones tradicionales e interviene protagónicamente en el aseguramiento del bien común.

Frente a esta incontestable realidad histórica, se advierte la palmaria insuficiencia de las estructuras jurídicas a través de las cuales el Estado secularmente ha desarrollado su quehacer, para responder a la problemática generada por las actividades —en un tiempo estimadas como propias de los particulares— que el Estado paulatinamente absorbe.

Por ello, en nuestro derecho positivo se incorporaron de un modo sucesivo, formas jurídicas específicamente proyectadas para cumplir el cometido empresario del Estado, las que al presente mantienen su vigencia y regulan las entidades a cargo de la misma.

Pueden contarse, actualmente, las siguientes formas institucionales mediante las cuales el Estado desenvuelve actividades de índole empresarial:

- a) Entidades autárquicas dotadas de régimen propio.
- b) Empresas del Estado (ley 13.653 y sus modificaciones).
- c) Sociedades de economía mixta.
- d) Sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
- e) Sociedades anónimas.

La «sociedad del Estado» auspiciada, participa de los caracteres de las entidades autárquicas y de las empresas del Estado, en cuanto excluyen toda intervención de intereses privados pero a la vez, difiere de ellas en tanto adopta las modalidades funcionales de las sociedades anónimas.

Por otra parte, si bien las «sociedades del Estado», a semejanza de las sociedades anónimas de economía mixta y con participación estatal mayoritaria, acuden subsidiariamente a las normas que reglan las sociedades anónimas, no admiten —y éste es el elemento distintivo fundamental— la introducción en el ámbito societario de la participación privada.

La «sociedad del Estado» pues, aspira a amalgamar la flexibilidad operativa propia de las sociedades anónimas, con las garantías de orden social inherentes a la propiedad estatal absoluta.

En el orden técnico-jurídico, cabe consignar que este proyecto significa la incorporación en la legislación argentina de la sociedad unipersonal, lo cual halla precedentes en el derecho comparado —marcadamente cuando el Estado actúa en función empresarial— e implica abolir el artificial pluralismo propio de las actuales sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, cuando el Estado es el único integrante.

Así mismo y a fin de proveerlas de un ámbito de acción lato, se las exime de las restric-

ciones relativas a la participación en otras sociedades que establece el artículo 31 del decreto ley 19.550/72.

Finalmente, se faculta al Poder Ejecutivo para transformar en sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta, las empresas del Estado y los regímenes especiales que al presente existen e igualmente los servicios cuya prestación se encuentren a su cargo, atribución ésta que al posibilitar la homogeneización jurídica de la actividad empresarial del Estado, tiende a posibilitar el ejercicio de las funciones de que ha sido investida la Corporación de Empresas Nacionales.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERÓN.  
José B. Gelbard.

**Sr. Presidente (Allende).** — En consideración en general. Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Brizuela (H. G.).** — Señor presidente: la consideración en general de este proyecto de ley sobre «sociedad del Estado» que ha enviado el Poder Ejecutivo, requiere expresar, de manera previa, algunas reflexiones que es oportuno recordar.

Las instituciones y las figuras jurídicas evolucionan constantemente en busca de una mejor adecuación de sus normativas a las mutables circunstancias reales del medio humano, económico, político, social y cultural al que pertenecen. Este es un fenómeno universal y de todos los tiempos. Va en ello algo que es consubstancial a los hombres y a los pueblos, cual es el movimiento evolutivo que es expresión natural de la vida misma. Frente a nuevos problemas, a nuevas necesidades y propósitos de una comunidad, aparecen también nuevas figuras del derecho que, como creaciones originales o como transformaciones de las existentes, procuran enmarcar dentro de sus preceptos la debida atención de aquellos requerimientos.

En nuestros tiempos ese proceso ha cobrado gran velocidad en todo el mundo hasta alcanzar un ritmo vertiginoso, producto derivado de la aceleración que viene caracterizando a la evolución en todos los órdenes de la vida, especialmente en lo político, en lo social y en lo económico; asistimos a una sucesión de cambios que demandan impostergablemente una rápida mutación en el cuadro institucional y jurídico.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, doctor Américo Alberto García.

La República Argentina no escapa a los efectos de esa evolución acelerada, sobre todo cuando un gobierno surgido de una mayoritaria voluntad popular y acompañado por el consenso

de vastos sectores de la ciudadanía, de distintas ubicaciones partidarias, se ha lanzado decididamente a la reconstrucción nacional.

Para acometer esa empresa gigantesca se requiere, entre otros presupuestos, contar con los instrumentos jurídicos adecuados y con una legislación apta para posibilitar el logro cabal de tan relevante objetivo. A ello responde, en su materia, el proyecto de ley que estamos considerando. Se trata de la creación de una figura societaria que se incorpora al cuadro de nuestras instituciones jurídicas para mejor servir al desenvolvimiento estatal de las actividades empresariales. Si bien se admite generalizadamente una creciente intervención del Estado en materias y asuntos que antes fueron reservados al sector privado, quedan por definirse determinadamente las distintas formas y modalidades que mejor convienen al ejercicio de esas diversificadas actividades empresarias, industriales, comerciales y de servicios públicos, porque la gestión de múltiples y complejos intereses de la sociedad contemporánea como presupuesto para promover el bien común, ha impuesto el replanteo progresivo de múltiples estructuras caracterizantes de las condiciones demoliberales, y exige una acción estatal inmediata, eficiente y ágil, que no puede alcanzarse a través de estructuras jurídicas e institucionales que han sido típicas del «Estado gendarme».

Hemos llegado a la necesidad de dividir netamente aquellas actividades que expresan el poder político concerniente al inalienable campo de las funciones del Estado en asuntos no productivos de aquellas otras actividades que se refieren a las haciendas productivas. Respecto de estas últimas han de alcanzarse modos y formas adecuados para que el Estado actúe con eficiencia en el ámbito industrial, comercial y de servicios.

Ya no bastan a ese fin la autarquía administrativa ni la desconcentración operativa ni la descentralización funcional, porque no obstante sus características propias, que sirven cabalmente para el cumplimiento de otras finalidades, no conceden a la actuación estatal las posibilidades necesarias para obrar empresarialmente.

Tampoco resultan suficientes las distintas figuras jurídicas que se han ido incorporando a nuestro derecho positivo, como la sociedad de economía mixta, el régimen de empresas del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, etcétera, las cuales no agotan la posibilidad de las formas societarias que el Estado puede adoptar para mejor obrar en el campo empresarial.

Es menester, pues, configurar una nueva forma de sociedad que, sin perder su original y exclusivo carácter estatal posea las modalidades funcionales idóneas para desenvolver actividades industriales, comerciales y de servicios, en

condiciones equivalentes a las que imperan para las empresas privadas.

El proyecto de ley en consideración, instaura en nuestro derecho positivo, la «sociedad del Estado» como una especial figura jurídica apropiada a aquellas finalidades y que es la que constituyen el Estado nacional, los Estados provinciales, los municipios y los organismos estatales autorizados o las sociedades comprendidas en la ley propiciada, para desarrollar actividades industriales, comerciales, o de servicios públicos, con exclusión de toda participación de capitales privados.

Pero esa creación debe ser valorada en relación muy directa con otra institución de reciente advenimiento y de singular trascendencia: la Corporación de Empresas Nacionales. Como bien lo señala el mensaje del Poder Ejecutivo, se procura dar homogeneidad jurídica a la actividad empresarial del Estado, para coadyuvar las funciones que se han atribuido a la corporación. Así, pues, corresponde merituar este proyecto en conexión con esa Corporación de Empresas Nacionales cuya importancia fue debidamente destacada en su oportunidad y en este recinto en la ocasión de tratarse la ley de su creación y a través del informe desarrollado por el señor senador doctor Juan Carlos Cornejo Linares, a cuyos conceptos me remito.

La corporación, entonces, no podrá desenvolverse en forma completa sobre la base de una disímil configuración institucional de las distintas empresas corporadas, lo que está indicando que este proyecto que tratamos adquiere una doble significación: primero, instaurar en nuestra legislación la forma jurídica de la «sociedad del Estado», llenándose un vacío existente en el derecho positivo argentino en cuanto a este punto; y en segundo lugar, contribuir a facilitar un desenvolvimiento eficiente de la Corporación de Empresas Nacionales, mediante la transformación que podrá operarse en la estructura institucional de las empresas integrantes, al adoptar esta nueva forma societaria, conforme lo prevé el artículo 7º de este proyecto de ley.

El vigoroso proceso de reconstrucción nacional con el que nos hemos comprometido los argentinos por encima de cualquier diferencia, se refleja en los ámbitos legislativos en demanda de medios de ejecución que sirvan idóneamente a la trascendental finalidad de aquel proceso. Estamos prontos a responder mediante este proyecto a tales requerimientos.

Es por eso que el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nos ubica dentro de la problemática societaria. En este sentido resulta obvio destacar el enorme desenvolvimiento que, en las últimas décadas, han adquirido las formas societarias, en virtud de lo cual puede decirse sin riesgo de equivocarse que no existe actividad económica de alguna importancia que no sea desarrollada por sujetos de esta naturaleza.

Distintas son las causas que han llevado a este resultado, y entre otras, las ventajas que sobre otras formas de colaboración ofrecen las sociedades, dotadas de una personalidad propia y de órganos administrativos de eficiente funcionamiento, y la limitación de la responsabilidad de los componentes de la empresa que adoptan algunas de las formas societarias que establecen dicha posibilidad, son motivos determinantes de la difusión de este sujeto de derecho. Y a esta difusión la ha acompañado la multiplicación de los problemas jurídicos resultantes de la creación y desarrollo de un ente con personalidad propia, desde luego separada de la de sus miembros.

En este aspecto, son y seguirán siendo arduas las polémicas en torno de la subsistencia y aun de la creación de un organismo societario con un solo miembro.

En efecto, si sociedad supone el acuerdo de voluntades, o la conjunción de varias personas —dos por lo menos— que aportando bienes en común persiguen una finalidad lucrativa, ¿cómo puede siquiera imaginarse que pueda existir dicho ser jurídico sin que se encuentre presente la pluralidad de socios que parece ser presupuesto necesario?

Unos, fundados en principios generales del derecho societario, y otros apuntalados por disposiciones legales especiales, son muchos los estudiosos del derecho que han analizado el tema y llegado sobre el mismo a muy diversas conclusiones.

Por eso me he permitido, como parte integrante de este informe, incorporar algunos antecedentes que hacen a la legislación que estamos tratando.

Con respecto a los antecedentes extranjeros, sin duda es en Italia donde más se ha tratado el tema de las sociedades constituidas por un solo accionista. Y en este sentido podemos distinguir la doctrina anterior y posterior a 1942.

Antes de 1942 diversos autores sostuvieron la viabilidad de las sociedades unipersonales, y se puede sostener que fue Bonelli quien, a partir de 1911, sentó las bases de la doctrina que sostuvo este principio.

Famosa fue la polémica mantenida con Manara, a quien acompañaban autores de la talla de Soprano y Marcheri.

También se cuentan entre los que se oponían a Bonelli, Vivante, Navarrini, Messineo, Dominico, Russo, Buttera, De Genaro y Cicu.

Por su parte, a favor de la existencia de la sociedad unipersonal se manifestaron Fre, Ferrara, Mossa, Straffa, Bomfante, De Gregorio, Ascarelli y Grecco.

La doctrina posterior a 1942, generada en las disposiciones del Código Civil de dicho año, dio lugar a nuevas y favorables opiniones, interpretativas en cuanto a su alcance y naturaleza.

En el sentido de considerar la validez de este tipo societario, se expresaron a favor Scialoja, Pien, Grecco y Ferrara, y en contra, Murano.

Con respecto a otras corrientes europeas, podemos señalar lo siguiente: en los países de habla germánica, se desarrolla una tendencia marcadamente favorable a la admisibilidad de las sociedades constituidas por un solo socio.

Wieland puede ser considerado el precursor en la materia, y son partidarios de esta tesis Endemann, Renaud, V. Volderndorff, Gareis y Fuchsberger, Stobe, Feine, Pisko, Friedlander, Lehmann, Gierke y Staub.

En España, en una posición intermedia se encuentran Garrigues, Jordano Barea y Felipe de Solá Cañizares.

En Gran Bretaña, la jurisprudencia, a partir del famoso caso Salomón, en 1894, ha admitido la legitimidad de una sociedad cuya personalidad es totalmente separada de la de su único socio real.

A estos antecedentes extranjeros he creído conveniente agregar algunos nacionales.

Comenzaré por los aspectos doctrinarios.

El principal sostenedor de la teoría de la sociedad constituida por un solo socio fue Yadarola, con quien están de acuerdo Satanowsky y Carlos A. Malagarriga.

En contra, pueden ser citados Carlos J. Zavala Rodríguez, Raymundo L. Fernández, R. Castillo y Siburu.

Ampliando los antecedentes, diré que la jurisprudencia de nuestros tribunales es también positiva, si bien no han tenido oportunidad de pronunciarse con frecuencia sobre el tema. Se pueden citar algunos fallos que muestran que la opinión de los jueces se volcó favorablemente hacia la existencia de las sociedades de un solo socio. El juez Franklin Barroetaveña ordenó la inscripción de una sociedad de responsabilidad limitada de un solo socio. Y el 30 de octubre de 1943, la Cámara Comercial confirmó el fallo del juez Juan A. García, que había admitido la existencia de una sociedad con un único socio. En idéntico sentido la misma cámara se expidió el 18 de marzo de 1953.

A estos antecedentes jurisprudenciales es oportuno agregar otros de orden administrativo. Si bien hasta fecha reciente el criterio de la Inspección General de Personas Jurídicas había sido contrario a la existencia de sociedades con un solo socio, con fecha 28 de abril de 1972 se modificó ese criterio al aprobar los estatutos de SEGBA, Sociedad Anónima, que prevén que un solo individuo puede poseer el 100 por ciento de las acciones. Este estatuto se inscribió en el Registro Público de Comercio el 29 de mayo de 1972.

Por todos estos antecedentes, las comisiones estiman que en el caso de las sociedades constituidas por los entes previstos en el artículo 1º del proyecto, la admisión del criterio sugerido por el Poder Ejecutivo no admite discusión.



En esta oportunidad he creído apropiado destacar algunas diferencias que existen entre las sociedades del Estado según este proyecto y las sociedades anónimas con participación estatal. Lo remarco ahora porque en el seno de las comisiones se han vertido opiniones que mostrarían que a través de las sociedades anónimas con participación estatal podrían lograrse los objetivos que persigue el Poder Ejecutivo con la remisión del presente proyecto.

Sin embargo, las diferencias existentes entre ambos tipos jurídicos son tan notables que nos hacen sin ninguna duda partidarios de la sanción del proyecto que estamos tratando.

Esas diferencias son las siguientes: a) el proyecto prevé que las sociedades del Estado pueden ser unipersonales; b) no rigen para ellas las limitaciones relativas a la participación en otras sociedades; c) no permiten la incorporación de aportes privados a su capital social, asegurando exclusivamente el 100 por ciento del aporte estadual; d) en lugar de acciones emitirán un certificado nominativo, sólo negociable entre las personas que puedan constituir este tipo de sociedad.

Al afirmar esto último solamente me estoy adelantando a una modificación que en nombre de la comisión voy a solicitar del Honorable Senado en la oportunidad de tratarse en particular el artículo 4º, que establece que en lugar de acciones se emitirán certificados no negociables. La comisión en este caso, analizando con profundidad el problema, ha considerado que no se altera el efecto ni el objetivo fundamental de la sociedad del Estado, al establecer que los certificados pueden ser negociados entre los entes estadales que pueden constituir las sociedades del Estado. Ello se hace, en fin, para dar mayor campo operativo a este tipo de sociedades.

Las comisiones creen que lo expuesto hasta aquí es suficiente justificativo para la creación de este tipo societario. No obstante, queremos dejar especialmente señalado nuestro convencimiento de que la sociedad del Estado constituye el medio más idóneo para superar el problema derivado de la creciente complejidad que desde el punto de vista jurídico e institucional presentan las entidades estatales, circunstancia que hasta la fecha ha impedido que el Estado participara en forma activa y en la medida en que la realidad económica subyacente así lo exigía.

Yendo al análisis en particular, habremos de referirnos a algunas modificaciones sugeridas por las comisiones, que ellas proponen introducir en el texto de la ley proyectada y que figuran en el correspondiente orden del día.

La primera modificación en la redacción inicial del artículo 1º tiende a substituir una expresión definitoria por una frase determinativa, considerada más apropiada al texto de una ley. La segunda modificación sugerida con relación

al mismo artículo procura dar mayor claridad a su enunciado.

Respecto del artículo 3º se efectúa una transposición de la frase «a su capital», con miras a precisar mejor el sentido de esa norma que impide recurrir a fondos privados para formar el capital social, lo que no obsta para la realización de las múltiples formas operativas financieras de las sociedades con particulares, siempre que tales operaciones no importen integración o incorporación al capital social.

El artículo nuevo propuesto con el número seis procura reafirmar las modalidades funcionales propias de las sociedades del Estado que, por su naturaleza, no deben estar dentro de los alcances de las leyes que en la norma se citan, que son específicamente aplicables dentro del ámbito oficial de la administración pública.

El otro artículo nuevo, que se incorpora como 8º, se dirige a establecer claramente que aquellas sociedades del Estado nacional o de sus organismos deberán ubicarse dentro del marco institucional de la Corporación de Empresas Nacionales, para lo cual se dispone que los respectivos certificados representativos del capital de esas sociedades integrarán el patrimonio de la corporación.

Digamos, por último, que las instituciones se enriquecen constantemente por el signo evolutivo de las transformaciones que las renuevan o por el espíritu innovador que las instaura. Cada mutación que se opera en el campo institucional y jurídico, así como cada creación que adviene en el mismo, no importa menosprecio ni significa subestimar lo anterior. El progreso señala su necesaria dirección hacia adelante y no es retrospectivamente como se alcanzarán las metas que la evolución impone. Cuando se marcha en pos de un gran destino jamás se retrocede para habitar viejos ámbitos ni se detiene largamente para contemplar los tramos recorridos.

Por eso al adherir decididamente a la consagración legislativa de esta figura societaria estatal, cuya consideración acabamos de tratar, no desconocemos las restantes formas jurídicas que, con similares propósitos a los nuestros, se han ido incorporando al derecho positivo y que subsistirán; en este caso simplemente aportamos una figura más, a la que atribuimos singularidades capaces de convertirla en instrumento de alto valor para el desarrollo de una mejor actividad empresarial del Estado en las actuales circunstancias.

Señor presidente, señores senadores: dejo así informado este proyecto en nombre de las comisiones de Economía, de Legislación General y de Industria y Minería del Honorable Senado. Tengo la convicción de que a través de este proyecto de ley, cuya aprobación os aconsejo, habremos enriquecido nuestro derecho positivo incorporando la figura societaria estatal que la realidad argentina reclama y aportaremos un



instrumento de alto valor para servir convenientemente a la reconstrucción nacional en la que estamos empeñados pueblo y gobierno.

**Sr. Pugliese.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Pugliese.** — Señor presidente: la ausencia de nuestra firma en el despacho debe considerarse como una manera de expresar nuestra disconformidad con el trámite legislativo impreso a un asunto de tan vital importancia.

Este proyecto del Poder Ejecutivo tuvo entrada el 12 de diciembre último y fue girado a las comisiones de Economía, de Industria y Minería y de Legislación General. La comisión de Economía asumió por sí la responsabilidad de convocar en conjunto a todas las comisiones intervinientes, y en una sola reunión, con la asistencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, se produjo despacho apenas una semana después de la fecha de entrada. Con ello queda dicho que no existió la oportunidad de realizar un estudio profundizado del tema.

Personalmente, lamento muy de veras la necesidad que tengo de formular esta crítica, tanto por la alta consideración y estima que siento por el presidente de la Comisión de Economía, señor senador Brizuela, como por el hecho de que, a mi juicio, este tratamiento quiebra, de alguna manera, el espíritu con que esta comisión abordó la consideración de temas fundamentales como la nacionalización de los depósitos bancarios, el régimen de las entidades financieras, la renacionalización de los bancos, la ley de inversiones extranjeras, la carta orgánica del Banco Central, e incluso la Corporación de Empresas Nacionales, que aun con nuestra disidencia, debo admitir que fue objeto de un estudio pormenorizado.

En todos estos casos trabajamos de consuno todos los integrantes de la comisión y, por nuestra parte, sin especulación de ninguna naturaleza, aportamos nuestra experiencia y elementos de juicio que siempre fueron receptados, tanto por los colegas de la comisión como por altos funcionarios del Poder Ejecutivo que asistieron a nuestras deliberaciones.

Por otra parte, no existe en este caso razón de urgencia que justifique este despacho acelerado. Y debe destacarse, además, que el pedido de mayor análisis no perseguía librar un combate retardante sino, a lo sumo, demorar quince días el tratamiento de una cuestión cuya importancia no puede discutirse.

No propondré que el despacho vuelva a comisión con esos fines porque lo considero inútil si no contara previamente con la conformidad de la mayoría; pero si ésta lo resolviera así, me sentiría muy feliz de comprobar que aquel espíritu que presidió nuestras deliberaciones en la comisión vuelve, triunfante, a ser una realidad.

Entrando a la consideración del tema, debo apreciar, en primer término, que no está en dis-

cusión —por lo menos para nosotros— la necesaria intervención del Estado en el proceso económico, abandonando la aparente neutralidad del Estado liberal clásico, no ya en la directa explotación de los servicios públicos sino también asumiendo por sí la actividad empresarial.

Marcos Kaplan, en su libro *Desarrollo económico y empresa pública*, define, a mi juicio acertadamente, los motivos de esta intervención cuando dice: «El ascenso y la fuerza y presión crecientes de los sectores populares y no privilegiados se traducen en una mayor democratización del Estado, y en exigencias de que el poder de éste sea usado en una escala más amplia y en un sentido de mayor justicia y creciente igualación de oportunidades. Ello se manifiesta, por una parte en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la elevación constante de los niveles de inversión, producción, ingreso y bienestar; especialmente para satisfacer la exigencia de plena ocupación. Se manifiesta también en la afirmación de la conveniencia y necesidad de que el Estado intervenga para impedir que grupos dominantes organicen y regulen mercados y precios, en su propio bienestar particular y en perjuicio de sectores mayoritarios de asalariados, agricultores, pequeños y medianos empresarios y consumidores».

Los formidables cambios provocados en el mundo como consecuencia, primero, de la guerra mundial de 1914; la gran crisis de 1929-1930, la Segunda Guerra Mundial; la irrupción de un mundo socialista y el proceso de descolonización o de liberación de pueblos coloniales, han dado lugar también a que los grandes países occidentales de capitalismo avanzado tuvieran la necesidad de abandonar la filosofía decimonónica del progreso indefinido, con su correlato de creer que las fuerzas naturales del mercado, libradas a su generación espontánea, fueran los motores del crecimiento y el desarrollo.

Ellos también tuvieron que recurrir a una intervención creciente del Estado y se obligaron a enriquecer las teorías de la planificación democrática como respuesta al desafío socialista de la planificación centralizada a partir de la socialización de los medios de producción. Y es a partir de esta marcha incesante de la humanidad en procura de mayor justicia y bienestar para todos, y no para pocos, que se enriquece la literatura y la práctica sobre qué medios son los más aptos para canalizar correctamente y de manera que se alcancen realmente los fines perseguidos, esta necesaria actividad del Estado moderno.

Las «Sociedades del Estado» que nos propone el Poder Ejecutivo, son apenas uno de los medios, y no el mejor, para la organización jurídica de sus empresas. De acuerdo con el proyecto, las sociedades del Estado son aquellas que constituye el Estado con exclusión de toda participa-

ción de capital privado, las que se someterán, en su constitución y funcionamiento, a las normas que regulan las sociedades anónimas.

En su exposición de motivos, el Poder Ejecutivo dice que «la Sociedad del Estado aspira a amalgamar la flexibilidad operativa propia de las sociedades anónimas, con las garantías de orden social inherentes a la propiedad estatal». Por mi parte, creo que aquí hay un error, o quizá un sofisma. La propiedad estatal no da de por sí garantía de orden social si su composición y funcionamiento están basados en un espíritu privatista. Precisamente, es el concepto de empresa pública —por supuesto, propiedad estatal— el que asegura el concepto de rentabilidad social —no orden social— como opuesto al de rentabilidad capitalista propio de la empresa privada.

Por otra parte, la empresa pública surge de una ley del Parlamento que puede acordarle toda la flexibilidad empresaria que ella requiere, con lo que se logra, al decir de Kaplán, «un equilibrio racional entre las necesidades de libertad de iniciativa, flexibilidad y eficiencia empresaria, por una parte, y rentabilidad pública y control estatal, por la otra».

Yo no voy a entrar al análisis pormenorizado del proyecto de ley, porque nosotros creemos que estos conceptos de empresa pública frente a la sociedad de Estado, con las características de sociedad anónima, son los que debieron haber sido objeto de un estudio mayor en las comisiones y en debate con los representantes del Poder Ejecutivo, para establecer cuáles eran los fines y de qué manera podían obtenerse sin necesidad de recurrir a una figura que también obliga, como ha dicho el señor miembro informante, a forzar la teoría jurídica que se ha hecho en todas partes del mundo, con la creación de las sociedades unipersonales, que a mí no me preocupan mayormente, porque, en definitiva, los otros tipos de sociedades con propiedad estatal absoluta constituyen, además, una ficción.

De manera que ése tampoco es el problema, sino el concepto de carácter privado de la organización de la sociedad frente al concepto, a mi juicio más moderno, de la empresa pública para el cumplimiento de los fines del Estado. Porque esto nos lleva, además, a establecer también lo que no prevé el proyecto, ni siquiera los fundamentos del Poder Ejecutivo: cuáles son estos fines, y de qué manera se obtienen los mismos.

Por otra parte, ni en uno ni en otro caso están establecidas las políticas. Creo e insisto aquí —y en esto todos estamos de acuerdo— en que la falencia de las empresas del Estado actuales no se debe tanto a la falta de flexibilidad como a la existencia de políticas que deliberadamente las dejaron en el estado de desquiciamiento en que se encuentran. De manera que

lo importante, a mi juicio, era discutir, frente al carácter de la sociedad de Estado, cómo la sociedad anónima —única forma jurídica de flexibilizar el comportamiento de las empresas del Estado— debió ser confrontada con el concepto de empresa pública, que tiene una rica literatura en todas partes del mundo, ya se trate del mundo capitalista como del mundo socialista, como de los países en desarrollo o conocidos ahora por la denominación de Tercer Mundo.

En cada uno de estos casos la caracterización es distinta en cuanto a los fines que cada una de estas composiciones de Estado persigue. Pero lo mismo en Inglaterra que en España o Italia, o en Checoslovaquia, Polonia o en la Unión Soviética, o en los países de América latina, se crearon corporaciones sobre la base del propósito común, que determina la necesidad de la intervención del Estado —sobre todo en nuestros países— para acumular el necesario capital con el fin de mantener un ritmo de inversión a los efectos de fundar en él un crecimiento autosostenido. De manera tal que cuando no apareciera la iniciativa privada en fines esenciales del Estado, éste concurriría a crear estas condiciones de acumulación de capital y de inversión suficiente como para que el desarrollo se autosostenga y se autogenera a través de estas organizaciones empresariales.

De modo que lo que está en discusión —y no quiero ser dueño absoluto de la verdad— son dos conceptos, dos maneras de manejar esta intervención del Estado, no en oposición de fines sino de medios.

Nosotros creemos también, y se ha dicho hace poco, que existen en el país más de 130 empresas estatales. Confieso que no conozco a todas porque tal vez sean de dominio público sólo las empresas estatales de mayor repercusión, como ser las realmente fundamentales: YPF, YCF, Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos, etcétera. También he oído expresar al señor ministro de Economía, sin que se lo haya desmentido, su propósito de pasar muchas de ellas al dominio privado. Es posible que existan empresas estatales que puedan pasar al dominio privado, pero esta realidad es necesario conocerla; de qué manera va a operar la ley; porque una de las defensas que se le hacen a la sociedad-Estado es la de que ella resulta el mejor medio para que de primera intención aparezca el Estado —por la inexistencia de capitales privados— y que luego, conseguido el éxito y obtenidos aquellos capitales, pueda pasar al dominio privado.

Para mí estas razones son suficientes como para no acompañar con nuestro voto el despacho de la comisión.

**Sr. Cornejo Linares.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Pugliese.** — Con muchísimo gusto, señor senador.

**Sr. Cornejo Linares.** — Quisiera saber, señor senador, cómo ve usted que esta figura jurídica pueda facilitar el pase de empresas del Estado a entidades privadas.

**Sr. Pugliese.** — Yo no he dicho que esta figura facilite el paso de las propiedades del Estado a manos privadas. Dije que entre quienes defienden la figura de la sociedad-Estado, uno de los argumentos que esgrimen es el de que esta sociedad se crea con el objeto de que el Estado intervenga de primera intención allí donde faltan capitales privados para luego transferirlas al sector privado, una vez obtenidos estos medios.

Lo que estoy fundando aquí es la necesidad de que asuntos de esta importancia tengan el necesario debate en el recoleto seno de la comisión con integrantes del Poder Ejecutivo, sin especulaciones de ninguna naturaleza, con el objeto de traer al recinto la convicción de que estamos votando una nueva forma jurídica que se agrega a las existentes y que realmente cubre esos fines que no pueden ser cubiertos por esta otra forma a que me refiero yo, de empresa pública, que podría servir exactamente de la misma manera que ésta o quizá mejor. Nos ha faltado esta confrontación que yo deseaba.

Además, quisiera recoger una palabra del señor miembro informante, por lo menos en lo que hace a mi pensamiento, porque si no he entendido mal, él se refirió a opiniones esgrimidas en el seno de la comisión, en cuanto a considerar que con las sociedades de participación estatal mayoritaria o sociedades mixtas, se podían obtener los mismos objetivos que con esta forma jurídica. Lo único que yo quería señalar es que no soy el que ha emitido esa opinión y no sé si el señor senador comparte mi criterio.

**Sr. Brizuela (H. G.).** — Efectivamente, señor senador. No ha sido usted al que he aludido.

**Sr. Pugliese.** — Yo estuve en esa reunión y no había oído quién había expuesto esa posición, y como soy el opositor al dictamen podía quedar flotando que era una respuesta al pensamiento de mi parte.

Lo que quiero señalar es que en los países que también crearon la Sociedad del Estado existen estas sociedades distintas, pero las determinaron por ley, según las categorías, e inclusive para establecer un problema de grado, de mayor a menor, donde el Estado podía estar con todo su capital, donde podía estar con sentido mayoritario y donde podía tener participación minoritaria. Fundamentalmente, ése es el régimen de España e Italia, que establecieron los *holding* —el IRI y el INDI— que tienen cierta similitud con lo que se ha dado en llamar aquí «Corporación de Empresas Nacionales». Esto es realmente lo que quería señalar.

Además, con lo que ha dicho ahora el señor miembro informante, en cuanto a que todavía en el día de hoy tenemos que agregarle modificaciones al despacho ya hecho con bastante anticipación, debo decir que aquí, por lo menos,

hay que establecer que no lo hemos estudiado o que lo hemos hecho con cierta ligereza. Yo no quisiera, y me desagradaría bastante, que se nos convirtiera en una máquina de votar, sin un examen importante y exhaustivo como debe hacerse ante problemas en los cuales coincidimos en los fines, pero que es importante que seamos escuchados en cuanto a los medios. Sobre todo, porque cada vez que se envía un proyecto se habla de la reconstrucción y de las coincidencias alcanzadas entre fuerzas sociales y políticas. Pero yo sostengo que si bien hemos alcanzado esas coincidencias, somos convidados de piedra, cuando en la implementación de las mismas, que en definitiva constituyen fines y objetivos, estamos completamente ausentes. Y parecería que el sentido de la reconstrucción nacional —que es una palabra que se repite en todos los documentos al igual que el vocablo «liberación» y que yo afirmo que es mucho mejor dejarlas de usar y hacer realmente la liberación y la reconstrucción— no es compartido por nosotros y que no estamos animados de esos propósitos y que nuestras opiniones no pueden ser recogidas, con lo cual quedamos marginados de nuestro deseo vehemente de colaborar patrióticamente en la liberación y reconstrucción nacional.

Nada más.

**Sr. Cerro.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (García, A. A.).** — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Cerro.** — Señor presidente: no soy especialista en economía y entiendo que este instrumento que el Poder Ejecutivo nacional y la mayoría presentan para nuestra consideración, es un medio que un gobierno elige para la realización de su programa, y en este sentido no nos merece objeción alguna y apoyamos en general el proyecto.

Pero si no nos equivocamos en la interpretación, advertimos con respecto a la segunda parte del artículo 5º y al 6º nuevo, que tales disposiciones pueden ser objetadas de inconstitucionalidad. Esto se debe a lo siguiente: en el artículo 1º se expresa que se denomina sociedad del Estado, entre otras, a las constituidas por los Estados provinciales y los municipales. Es decir, si no interpreto mal el texto, un Estado provincial puede constituir una sociedad del Estado y dos o más Estados provinciales pueden constituir, mediante acuerdos, una sociedad del Estado. Si ello es cierto, las leyes de contabilidad, las de obras públicas y las de procedimientos administrativos son provinciales, y nacionales en la esfera de lo nacional. Por ende, siendo una facultad privativa de las provincias sus leyes de obras públicas, de procedimiento administrativo y de contabilidad, no se puede por una ley nacional declarar que ellas no son de aplicación.

Entiendo que al legislar así, si lo hacemos para la Nación es una cosa, pero si sancionamos

una ley de aplicación también para las sociedades que las provincias constituyan bajo el régimen de la misma, no podemos declarar la inaplicabilidad de dichas leyes provinciales.

Esto lo señalo porque muchas constituciones provinciales establecen disposiciones especiales, tal es el caso, por ejemplo, de la licitación pública. Si una Constitución provincial obliga que la ley de obras públicas o de contabilidad aplique el procedimiento de la licitación pública, no puede una ley nacional derogar aquella constitución en ese aspecto, ni la ley provincial, que es su consecuencia.

El mismo criterio considero aplicable respecto a la segunda parte del artículo 59. En la primera parte de este artículo se dice: «No podrán ser declaradas en quiebra». Esta es una disposición perfectamente constitucional, por cuanto la legislación sobre este instituto es uno de los poderes expresamente concedidos en el inciso 11) del artículo 67 al Congreso Nacional. Pero agrega este artículo 59: «Sólo mediante autorización legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad del Estado». Indudablemente, que esto último, referido al orden nacional no merece objeción. El problema se plantea si tratándose de una sociedad municipal o de una sociedad provincial se va a necesitar autorización del Poder Ejecutivo nacional o del Congreso de la Nación para su disolución. Creo que no está aclarado si sólo se refiere al orden nacional, por cuanto respecto al orden provincial hay que dejar librada la situación a las constituciones y leyes de las provincias o al acuerdo que ellas realicen como consecuencia de la facultad que tienen para ese fin.

Formulo estas objeciones porque entiendo que pueden ser impugnados de inconstitucionalidad estos puntos del proyecto en consideración.

Nada más.

**Sr. Brizuela (H. G.).** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Brizuela (H. G.).** — Señor presidente: en primer lugar y sin ánimo de entrar en debate, deseo aclarar algunos conceptos del señor senador Pugliese.

En realidad, nosotros —y cuando hablo así me refiero a la mayoría de la Comisión de Economía— en el momento de presentar el despacho consideramos agotado este problema. Es decir, no hubo ligerezas, sino el pleno convencimiento de que estábamos con la labor ya totalmente concluida y no existía a nuestro criterio razón alguna para dilatar la presentación del dictamen a los efectos de la consideración del proyecto por el Senado. Estas fueron las razones que determinaron ese proceder y las he hecho presente al señor senador Pugliese...

**Sr. Pugliese.** — Yo también le hice presente mi posición contraria.

**Sr. Brizuela (H. G.).** — Recuerdo en esta oportunidad las palabras del senador Frugoli cuando se refería a que él, siendo único integrante de su bloque, no podía estar en todos los asuntos. Comparto el criterio del señor senador.

En cuanto al senador Pugliese, es evidente que en esta última etapa de la actividad legislativa ha receptado toda la labor que hace al área económica, pero le restó tiempo para volcarlo a la Comisión de Economía. Esto no es un problema nuestro. Nosotros no hemos querido molestar al senador ni apresurar un trámite, sino que hemos estimado agotado el estudio del proyecto y por eso lo hemos sometido a la consideración del cuerpo.

En lo que respecta a las palabras del senador Cerro, advierto que la norma que se agrega como artículo 69 no tiene otro sentido que el de precisar el alcance de las disposiciones que van a regir este tipo de sociedad. Es decir, no aplicar a la Sociedad del Estado que se menciona en el artículo 69 estas disposiciones que tienen carácter eminentemente público. Porque estamos creando una entidad con características de ente privado pero con capital estatal. Por lo tanto, las disposiciones que se aplican son las establecidas para la constitución, creación y funcionamiento de las sociedades anónimas.

Con ese tipo de legislación se va a constituir este nuevo ente. Creo que con esto queda aclarado el aspecto en cuestión.

**Sr. Cerro.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Cerro.** — Entiendo perfectamente que eso es lo que se quiere hacer. Pero he sostenido que no tenemos facultades para ello. Hay atribuciones de competencia del poder nacional y otras de los poderes provinciales, y entiendo que con una legislación de este tipo estamos avanzando sobre los poderes reservados de las provincias. Eso es simplemente lo que he planteado: un escrúpulo de tipo constitucional.

**Sr. Brizuela (H. G.).** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Brizuela (H. G.).** — A mi criterio, la interpretación del señor senador es equivocada. No tratamos de avanzar sobre los poderes provinciales, simplemente señalamos que las disposiciones establecidas para los entes de derecho público no son aplicables a este tipo de sociedad, que se va a regir por disposiciones de carácter privado.

Nada más.

**Sr. Pugliese.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Pugliese.** — No sé si el cuerpo considera agotado este debate. De todos modos, quiero agradecerle al señor presidente de la Comisión de Economía la consideración personal referida

a la labor parlamentaria que he debido afrontar, pero a él le consta que hace varios meses que quienes estamos en el área económica no intervenimos en los debates.

No obstante, recuerdo que cuando vinieron a la comisión los funcionarios del Poder Ejecutivo con quienes tratamos los aspectos jurídicos del problema —que son importantes, sin duda, pero que a mí me interesan menos— creímos que iba a haber otra reunión, pues ellos manifestaron que no existía urgencia en el tratamiento del proyecto.

La formulación del dictamen responde, evidentemente, a una decisión de la mayoría. Eso lo tuve siempre muy en cuenta, pero debo expresar —agradeciendo la proverbial gentileza del señor presidente de la comisión, quien me informó permanentemente de cada actitud que iba a asumir la mayoría—, que en cada caso le manifesté mi disconformidad con el modo de proceder en un asunto de esta importancia.

Nada más, señor presidente.

**Sr. Cerro.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Cerro.** — Señor presidente: quiero manifestar, simplemente, que adelanto mi voto afirmativo en general, y que no haré uso de la palabra en la consideración en particular del dictamen por cuanto la comisión, a través de su miembro informante, ha manifestado claramente su opinión. Por lo tanto, dejo constancia de las reservas formuladas para la votación en particular.

**Sr. Pugliese.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Pugliese.** — Señor presidente: las observaciones que hemos formulado en la consideración en general del dictamen señalan nuestra oposición de fondo al proyecto de ley por el que se crea la sociedad del Estado.

En este sentido, quiero dejar constancia de nuestro voto negativo y señalar que no entraremos a la consideración en particular por estas mismas razones.

Así mismo, deseo agregar que lamento que no haya sido recogida nuestra indicación de que este importante proyecto vuelva a comisión.

Nada más, señor presidente.

**Sr. Presidente** (García, A. A.). — Se va a votar en general el dictamen de las comisiones.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (García, A. A.). — En consideración en particular.

Si ningún señor senador hace uso de la palabra, se va a votar cada artículo, incluyendo en

su caso las modificaciones propuestas por las comisiones.

—Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 1º, 2º y 3º.

—Se lee el artículo 4º.

**Sr. Brizuela** (H. G.). — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Brizuela** (H. G.). — Quiero proponer una modificación al artículo 4º. El texto del despacho original era el siguiente: «El capital de la sociedad del Estado será representado por un certificado no negociable, que será divisible en función del número de socios que las constituyan y proporcional a sus aportes». Ahora en cambio, propongo el siguiente artículo 4º: «El capital de la sociedad del Estado será representado por certificados nominativos sólo negociables entre las entidades a que se refiere el artículo 1º»

Fundamento esta propuesta en el hecho de que la disposición que se propone substituir establece una limitación absoluta a la transferencia de los títulos valores representativos del capital, que no hace a la esencia de la figura jurídica que se crea y, por el contrario, restringe la posibilidad de participación entre las distintas entidades estatales durante la vida de la sociedad. La norma que se propone permite negociar esos títulos valores, al mismo tiempo que se respeta la naturaleza de la sociedad, puesto que sólo pueden ser negociados entre organizaciones estatales.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor José Antonio Allende.

**Sr. Presidente** (Allende). — Se va a votar el artículo 4º, con la modificación que acaba de proponer el señor miembro informante.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se votan y aprueban los artículos 5º, 6º, 7º y 8º.

—Se lee el artículo 9º.

**Sr. Brizuela** (H. G.). — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Brizuela** (H. G.). — Siendo ésta la oportunidad, propongo el siguiente aditamento al final del artículo 9º: «Mantiénense para las sociedades del Estado que se constituyan los beneficios tributarios, impositivos y arancelarios de que gozan actualmente las entidades que se transformen y se exceptúan de todo tributo, tasa o arancel los actos conducentes a su transformación».

Ello resulta necesario para evitar trastornos económicos y financieros, y de todos modos no se hace sino mantener beneficios ya establecidos para las entidades que actualmente funcionan como sociedades y que se van a transformar en sociedades del Estado.

**Sr. Presidente** (Allende). — Se va a votar el artículo 9º con la modificación propuesta por el señor senador por Santa Fe.

—Se vota y resulta afirmativa.

—El artículo 10 es de forma.

**Sr. Presidente** (Allende). — Queda aprobado el proyecto de ley (1). Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión pública y se van a tomar las providencias del caso para realizar la sesión secreta a que se ha citado.

—Es la hora 23 y 26.

FEDERICO BARBOZA.

Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos.

---

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.